

Los fantasmas del etnocacerismo

Eduardo Cáceres Valdivia (*)

Al sublevarse, el 29 de octubre del 2000, Ollanta Humala no sólo añadía un nuevo ingrediente al conglomerado de eventos que marcaron la tumultuosa transición peruana. También inauguraba una carrera política cuyos temas y perspectivas desbordan ampliamente el texto del manifiesto que hiciese público a mediados de noviembre de dicho año.

Más allá de los enigmas que acompañaron la sublevación, no hay duda de que el hecho dejó abierta en la política peruana una ventana para una nueva versión del militarismo. Las diferencias entre ésta y las anteriores, hay que buscarlas, más que en los textos, en las resonancias que las propuestas del así llamado «etnocacerismo» tiene en la sociedad. Resonancias que a su vez nos remiten a los profundos cambios vividos por la sociedad y la política del gobierno militar de Velasco a la fecha.

I

Es clásica la periodización que hizo Basadre del militarismo en la República: el primero identificado con los vencedores de Ayacucho; el segundo con los derrotados en la guerra del Pacífico; el tercero, con la respuesta contrarrevolucionaria a la crisis del 1930 y los movimientos populares que en ella insurgieron. A estos tres momentos, añadiría el peculiar militarismo reformista de Velasco Alvarado (1968-1975), cuyas raíces pueden rastrearse en instituciones (CAEM) y eventos (los movimientos campesinos por la tierra y las guerrillas de fines de los 50 e inicios de los 60).

A esta historia podría sumarse el militarismo encubierto de las últimas décadas. La abdicación del poder civil en los escenarios de violencia no sólo dio paso a la instalación de estados de emergencia y comandos político-militares a partir de 1982, sino que permitió la rápida rearticulación de un proyecto político (el llamado Plan Verde de fines de los 80) que accedería al poder por la vía del pacto con Fujimori y el golpe de Estado del 5 de abril de 1992.

En cada uno de estos casos la intervención política de las Fuerzas Armadas se justificó a partir de diversas consideraciones

coyunturales. Vacío de poder, incapacidad de los políticos, corrupción, amenazas internas o externas. Subyacen, sin embargo, algunas consideraciones más de fondo: un diagnóstico de la sociedad peruana definida como «ingobernable» y de los políticos como incapaces de asumir la representación de la «nación»; una percepción de sí mismos como un cuerpo ajeno a los males del país, único capaz de representar al «cuerpo de la nación» y, por tanto, «institución tutelar de la Patria». Expresiones como esta han ingresado al texto constitucional en diversos momentos de nuestra historia y se han transformado en sentido común en diversos sectores de la sociedad. Para las clases dominantes, la tutela militar les ahorraba el esfuerzo de construir instrumentos y discursos capaces de hegemonizar el país; para diversos sectores medios y populares, la preeminencia militar les abría canales de movilidad social individual, en algunos casos, y de acceso a algunos bienes públicos a partir de relaciones de lealtad en un escenario en el que las mediaciones políticas institucionales eran prácticamente inexistentes.

El militarismo no es únicamente una corriente política. Comporta una visión de la sociedad y encuentra asideros en algunos aspectos de nuestro intrincado mapa ético y cultural. Una referencia bastante obvia es la que puede establecerse entre militarismo y autoritarismo patriarcal. Pocas instituciones son tan autoritarias y machistas como lo han sido las fuerzas armadas. En esto no hacen sino recoger y exacerbar prejuicios y comportamientos que atraviesan el conjunto de nuestra vida social. Hay, sin embargo, otras conexiones menos exploradas, difíciles de recoger bajo un solo término. La visión corporativa del Estado, por ejemplo, que reclama el tener un poder tutelar que se presente como desvinculado de intereses particulares, que hable y actúe en nombre de la «nación» o la «patria». Las enormes dificultades para establecer mediaciones legítimas y estables, lo que lleva a que la representación política sea vista permanentemente con desconfianza. Los bloqueos a la posibilidad de comunicarse, debatir, deliberar, lo que hace indispensable una autoridad arbitral, por encima de intereses y lenguas particulares. El descrédito de los procedimientos y el reclamo de eficacia, lo que lleva a ver la excepcionalidad como indispensable para poder garantizar seguridad y justicia.

Quien tenga dudas acerca de la pervivencia de estos rasgos recuerde simplemente como reaccionó el gobierno de Toledo frente a las movilizaciones que resultaron de la conjunción de la huelga del Sutep y una amenaza de paro campesino hace algunos

meses.

II

Sobre este telón de fondo se entienden mejor los movimientos militaristas que se han sucedido en la historia republicana. Éstos tienen, entre otras, la característica de ser movimientos de oficiales. Si bien es cierto que el ejército peruano ha sido un vehículo de movilidad social, tal como agudamente señaló Jorge Basadre, no ha dejado de ser una institución que reproducía la discriminación social y étnica: oficiales blancos o mestizos, soldados indígenas. La procedencia andina o provinciana de algunos caudillos militares implicaba una cierta reivindicación étnica, lo cual solía irritar y provocar enconos en la clase dominante (casos de Gamarra y Santa Cruz, en el siglo XIX, o de Velasco, en el siglo XX). Sin embargo, no tardaron los señores en darse cuenta de lo útil que podía ser para la dominación disponer de presidentes de color «modesto». En este sentido, Sánchez Cerro fue ejemplar.

Cuando decidieron formar partidos, los caudillos militares convocaron a las elites intelectuales, económicas y políticas. Tal fue el caso del Partido Constitucional de Andrés Avelino Cáceres, o el de la Unión Revolucionaria de Sánchez Cerro, o la Unión Nacional Odríista. El no-partido de Velasco se nutrió de intelectuales socialistas, de dirigentes sociales y oficiales imbuidos de un discurso nacionalista y reformista. Al día siguiente de su desplazamiento del poder, decidieron formar un partido que confluyó posteriormente en Izquierda Unida.

La novedad del «etnocacerismo» es que intenta hacer de los licenciados y reservistas su contingente fundamental. Más aún, el término «reservistas» es equivalente al de «militante» en el movimiento en cuestión. Su forma de organización sigue estrictamente el canon castrense. Actividades de propaganda se desarrollan cual maniobras militares en barrios urbanos y comunidades rurales. Sus volantes y periódicos reiteran hasta la saciedad, como solución a cualquiera de los problemas que se analicen, la aplicación de un sumario código militar en el que abundan castigos disciplinarios y ejecuciones.

No se requiere un análisis muy profundo para identificar al «sujeto social» del naciente movimiento. Los licenciados no son sino la condensación de un sector mucho más amplio: jóvenes varones, con limitada escolaridad, desempleados, provenientes de zonas

semirurales o semiurbanas, depende desde dónde se mire. Si Sendero Luminoso apostó a afincarse entre los jóvenes que accedían a la universidad y ahí confrontaban las tensiones de una modernidad agresiva y excluyente, los Humala pretenden construir su movimiento en un sector que se encuentra varios peldaños por debajo en términos de su «inclusión» en el país oficial: los que han tenido que pasar por el servicio militar obligatorio -muchas veces mediante levas forzosas- o que vieron en el enrolamiento voluntario la única alternativa para escapar al desempleo y la pobreza.

Los historiadores de la modernidad (Hobsbawn, Foucault, etc.) han señalado la importancia que tuvo la aparición de los ejércitos nacionales para la conformación de las naciones. No sólo en términos de construcción simbólica, sino también en términos de funcionalización o «disciplinarización» de los sujetos para su posterior ingreso a la producción. En años recientes se han publicado en Estados Unidos trabajos que sacan a la luz el impacto que tuvo el creciente enrolamiento de población negra en la dinamización de los movimientos por la igualdad de derechos: era difícil aceptar la segregación tras haber compartido trincheras y batallas bajo la misma bandera. Aunque suene paradójico, los ejércitos modernos contribuyeron a la expansión de la ciudadanía en el mundo.

Algo de esto ha sucedido en el Perú, particularmente a lo largo del siglo XX. Incluso nuestros novelistas lo recogen. Sin embargo, ha sido un fenómeno marginal. Por un lado, demasiada servidumbre al interior de los cuarteles; por otro, escasa modernidad fuera de ellos. Incluso los generales velasquistas no dejaban de tener mayordomos, cocineros y jardineros con uniforme militar. Lejos de pasar de la disciplina del cuartel a la disciplina de la fábrica, el licenciado peruano transita hacia un mundo precario cuando no caótico.

No es extraño, entonces, que a pesar de algunas traumáticas experiencias que recién han comenzado a ser denunciados, el desamparo se transforme en añoranza. Añoranza de un mundo jerarquizado, reglamentado, en el que las funciones de cada uno están establecidas, en el que las mediaciones deliberativas no sólo son innecesarias sino inconvenientes. Y que aquel mundo jerarquizado y ordenado aparezca como el modelo al cual hay que ajustar el caótico mundo de la vida cotidiana.

Militarizar la sociedad, reemplazar la política por el tutelaje de la

fuerza armada. ¿Suenan conocidas estas fórmulas? Si alguien tiene dudas acerca de su presencia en nuestra historia reciente, puede revisar el capítulo 1 del segundo tomo del *Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación*, donde se reseñan las atrocidades que inspiraron ideas similares a partir de mayo de 1980.

Es casi irrelevante que el discurso en cuestión hable de equidad, justicia, reivindicación étnica, moralización, etc. Lo central del mismo es proponer caminos y estrategias que se basan en establecer desigualdades mucho más radicales: la que diferencia a los que tienen el poder de decidir y ejecutar de los que serían (o seríamos) la tropa del cuartel social; injusticias mucho más profundas (e irreversibles): la que recusa procedimientos en función de procesos sumarios.

III

La reivindicación de identidades étnicas se ha expandido en el mundo contemporáneo. Hay quienes ven en esto una sana reivindicación de diversidad y pluralismo. Otros, una seria amenaza a la democracia y a los derechos humanos, en tanto estos movimientos suelen cuestionar cualquier forma de universalidad y convierten las diferencias en abismos insalvables. Mas allá de esta discusión, importante por cierto, es cada vez más evidente que existe una fuerte correlación entre la expansión de estos movimientos y el crecimiento de la desigualdad y la exclusión en el mundo. Asimismo, que lejos de ser una expresión directa de las poblaciones que viven y sufren estos procesos, estos movimientos son promovidos por elites locales y regionales que han intentado modernizarse y han fracasado, habiendo perdido poder de manera significativa en el camino. Ni el Mallku boliviano, ni Bin Laden, ni nuestros Humalas son campesinos pobres, monolingües, carentes de educación formal. Puede haber una intención de solidaridad en sus discursos, pero sin duda hay también una voluntad de poder que no puede pasar desapercibida.

Los vaivenes de la identidad en las décadas recientes no hacen sino confirmar que éstas, lejos de ser la expresión de una supuesta «esencia» de los sujetos, son construcciones sociales. Pero no a la manera de discursos literarios, o «relatos», como pretenden los posmodernos, sino como dispositivos estratégicos destinados a legitimar comportamientos sociales propios e inducir a respuestas por parte de los otros. Si yo, frente a un policía que

me detiene por haber cruzado una luz roja, me presento como fulano de tal, estoy indicando que me comportaré como ciudadano y espero un trato similar del policía. Si me presento como el amigo del ministro o el sobrino del general, estoy proponiendo otro juego estratégico. Exactamente lo mismo sucede con las identidades sociales. Poner por delante una identidad étnica es proponer un determinado juego estratégico. Tras los duros reveses vividos en el juego de clases, reivindicarse como grupo étnico (o raza o, muy cercano esto, como «comunidad de fieles») es apelar a argumentos que escapan a los avatares de la política y la historia inmediata. Es tratar de fundar una colectividad en raíces esenciales y suprahistóricas, de manera que ninguna fuerza histórica del presente pueda vulnerarla.

El problema es que se trata de un juego muy peligroso. Presentarse como un sujeto que establece diferencias esenciales con sus contemporáneos equivale a afirmar la imposibilidad de cualquier comunidad con éstos. No sólo el diálogo, también la discusión está cerrada de antemano. Y el único conflicto posible es el que culmina con el exterminio del adversario. La política, terreno del conflicto y la negociación, desaparece del escenario.

Basta revisar las páginas de *Ollanta*, publicación periódica del «etnocacerismo», para ver en acción al régimen que se nos propone: furibunda condena de la república, sus instituciones y sus políticos; idealización del Estado Inca y sus instituciones, y rechazo de cualquier mestizaje; afirmación de la nación como valor supremo y del ejército como su institución más importante; chauvinismo y xenofobia; amenazas de fusilamientos sumarios a diestra y siniestra: políticos, empresarios, homosexuales, etc.

Quien conozca, al menos superficialmente, la historia de las primeras décadas del siglo XX, no podrá dejar de establecer un paralelo entre lo que lea en *Ollanta* y lo que dijeron y escribieron en Italia y Alemania líderes que también venían de ejércitos derrotados y promovieron partidos militarizados cuya base social original fueron los licenciados y reservistas.

En una época en la cual la globalización ha adquirido rasgos tan agresivos y destructivos, no es casual que los nacionalismos reaparezcan. En el caso del movimiento de los Humala, esto trata de expresarse en el recurso a la figura de Andrés Avelino Cáceres. El «*tayta*» Cáceres, terrateniente de origen, pero que supo defender el territorio invadido en alianza con campesinos comuneros del centro del país. Vencedor de Tarapacá, héroe de la

Breña, su mayor tragedia fue, según Basadre, no haber muerto en Huamachuco. De haber sucedido esto hoy sería el héroe militar más grande de nuestra historia. Sobrevivió y fue presidente, no sin antes liquidar a los líderes comunales que habían sido sus aliados en la resistencia contra los invasores. Fue un pésimo presidente: restableció el tributo indígena en 1886, provocando rebeliones que no dudó en sofocar violentamente; firmó el contrato Grace, uno de los actos más entreguistas de toda nuestra historia; fundó un partido que estaba a la derecha del civilismo y, ante los intentos de perdurar más allá de su mandato, tuvo que ser derrocado por una insurrección popular en 1895. Es curioso que se recurra a una figura tan contradictoria para fundar un movimiento político que pretende reivindicar la equidad, el nacionalismo y la lucha contra la corrupción. En todo caso, es la primera vez que esto sucede.

IV

Más allá de sus incongruencias y peligros, el «etnocacerismo» es un nuevo síntoma de las graves consecuencias del incremento de la desigualdad y la exclusión sobre la política peruana. No sólo se trata de la inexistencia de mecanismos para acceder a la representación por parte de quienes viven en la pobreza y pobreza extrema, en el desempleo, en la dependencia de programas de asistencia social. Se trata de la erosión de un conjunto de prácticas y valores que, incluso en contextos de pobreza, se habían construido en décadas previas y se vieron seriamente afectados por la violencia y las reformas neoliberales. En particular de la erosión, cuando no desaparición, de identidades sociales construidas a partir de la asociación en torno a intereses comunes, basadas en la idea de que era posible obtener logros mediante la acción social directa y la negociación con el poder.

No hay duda de que parte de nuestro abanico identitario es la pertenencia a comunidades culturales, es decir colectividades que comparten creencias, costumbres, visiones del mundo y lengua. Pero pretender que estas identidades son las únicas o las fundamentales nos ubica en las antípodas de una sociedad moderna. Las reflexiones y las experiencias relativas a la forma de lograr una enriquecedora convivencia en la diversidad al interior de democracias sustantivas se han multiplicado en los últimos años. Bien nos valdría en el Perú conocerlas más a fondo. Pero lo que sí está claro es que ninguna de ellas será factible con los niveles de desigualdad y exclusión que se han acumulado en nuestro país a lo largo de las últimas décadas.